



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE NAYARIT

Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit
Segunda Sala Unitaria Administrativa
JCA/II/568/2023

Juicio Contencioso Administrativo:
JCA/II/568/2023

Actora:

Autoridades Demandadas:
Director General de Seguridad Pública
y Vialidad del Municipio de Tepic.
***** , Agente de Policía Vial.

Sentencia Definitiva

Tepic, Nayarit; a doce de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS para resolver los autos del Juicio Contencioso Administrativo JCA/II/568/2023, esta **Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit**¹, a cargo del **Magistrado Numerario licenciado Juan Manuel Ochoa Sánchez**, procede a emitir sentencia en el juicio promovido por ***** , –en adelante parte actora–, en los siguientes términos:

RESULTANDO

- 1. Presentación de la demanda.** El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se presentó ante Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por la parte actora, mediante el cual interpuso Juicio Contencioso Administrativo en contra de **la boleta de infracción con número de folio *******, emitida por la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Tepic, con fecha *****.
- 2. Admisión de la demanda.** El seis de septiembre de dos mil veintitrés, mediante acuerdo se admitió a trámite la demanda que promovió la parte actora, asimismo tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas de su escrito inicial de demanda, concediéndosele la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios. En ese mismo acto, se

¹A quien se referirá en adelante como “Segunda Sala”, salvo mención expresa, en concordancia con el Acuerdo General número TJAN-P-002/2023, emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobado en la Novena Sesión Ordinaria Administrativa SO-09/2023, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual, se declara el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y de la Sala Colegiada de Recursos, de este Tribunal de Justicia, a partir del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.



ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de diez días contestaran la demanda y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes.

3. Emplazamiento. El catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se emplazó a las autoridades demandadas, tanto de los hechos imputados por la parte actora como de sus conceptos de impugnación, actuación visible a foja 21 del expediente en que se actúa.

4. Cumplimiento a la suspensión. Mediante oficio recibido en este Tribunal el día veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad demandada dio cumplimiento a la suspensión del acto impugnado, informando que la accionante podía comparecer a recibir el vehículo retenido (actuación visible a foja 22), recayendo un auto de fecha veintiocho de septiembre de esa anualidad, en donde se tuvo a la autoridad informando tal circunstancia.

5. Contestación de la demanda. El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio a través del cual, las autoridades demandadas dieron contestación de manera conjunta a la demanda de Juicio Contencioso Administrativo interpuesto por la parte actora.

6. Integración de la Segunda Sala Unitaria Administrativa. Conforme al plazo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit², a través del Acuerdo General TJAN-P-002/2023, del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por el que se determina el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos y, a su vez, se extinguen la Primera y Segunda Sala Administrativa, con motivo del Decreto señalado con anterioridad, de lo que deriva a este Instructor le corresponde conocer y resolver el presente expediente, conservando su nomenclatura ya asignada y que su rectoría procesal correspondía y corresponderá al Magistrado Instructor actuante, hasta la culminación procesal del mismo.

²Se aprueba la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con fecha de publicación el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.



Una vez integrada la Segunda Sala Unitaria Administrativa, el Magistrado actuante dictó acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el que tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma a las autoridades demandadas, asimismo se tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas de su oficio de contestación de demanda y se ordenó correr traslado a la parte actora, a efecto de que se impusiera oportunamente del citado oficio de contestación y estuviera en aptitud de formular alegatos el día de la audiencia.

7. Celebración de audiencia. El día doce de diciembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de juicio prevista por el artículo 226 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en la cual se asentó la inasistencia de las partes, no obstante, de haber sido previamente notificadas; se desahogaron las pruebas admitidas y se les declaró precluido el derecho de formular alegatos a las partes, toda vez que ninguna de ellas los hizo valer. En ese mismo acto, se acordó turnar para resolución el juicio en que se actúa, acorde a lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, sentencia que hoy se pronuncia de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia. Con fundamento en los artículos 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 4, fracciones IV y V, 23³, 109, 119, 229 y 230 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit⁴, 1, 4, fracción XIV, 5, fracción II, 7, fracción II, 19, fracciones III y VII, 33, 37, 39, 40, 41, fracciones II y VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit; así como el Acuerdo General No. TJAN-P-02/2023⁵, aprobado por el Pleno del Tribunal de Justicia

³“Artículo 23.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y proceso administrativo.”

⁴A quien se referirá en adelante como “ley de Justicia”.

⁵Acuerdo General del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por el que se determina el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos y, a su vez, se extingue la primera y segunda sala administrativa, con motivo del decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la cual contempla una nueva integración, organización y funcionamiento de este Tribunal.



Administrativa en la Novena Sesión Ordinaria Administrativa, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés y el Acuerdo General No. TJAN-P-03/2023⁶, aprobado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria Administrativa, celebrada el trece de octubre de dos mil veintitrés, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa es constitucional y legalmente competente para conocer, tramitar y resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo, en razón de que se plantea una controversia administrativa entre autoridades de la Administración Pública Municipal y un particular, donde ejerce jurisdicción y competencia este Órgano Jurisdiccional.

Segundo. De las causales de improcedencia o sobreseimiento. De conformidad con los artículos 148⁷ y 230, fracción I⁸ de la Ley de Justicia, las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público e interés social, las cuales deben resolverse previamente al estudio del fondo de este Juicio Contencioso Administrativo, las opongán o no las partes, pues son de estudio preferente al tratarse de impedimentos legales que no permiten el estudio del fondo del asunto, por tanto, el juzgador debe primeramente analizarlas, pues de lo contrario se causarían evidentes daños y perjuicios a las partes promoventes.

Por lo anterior, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa se aboca al estudio y resolución de las causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento; en este caso, del oficio de contestación de demanda se desprende que las autoridades demandadas afirman que el juicio es improcedente, en primer lugar por las causal prevista en el artículo 224 fracciones VI y IX, con relación al diverso artículo 120, todos de la Ley de Justicia, por lo que procede el sobreseimiento con base en lo dispuesto en el artículo 225 fracción II del mismo ordenamiento.

En este caso, las porciones normativas citadas, establecen:

⁶Acuerdo General del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por el que se aprueba la adscripción de los Magistrados que integrarán las Salas Unitarias Administrativas, y a su vez, se establecen las nomenclaturas y el esquema de turnos de los asuntos de su competencia, con motivo del decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

⁷“**Artículo 148.** Contestada la demanda, el magistrado instructor examinará el expediente, y si encontrare acreditada claramente alguna causa evidente de improcedencia o sobreseimiento, a petición de parte o de oficio, emitirá la resolución en la que se dé por concluido el juicio. En caso de que la causal no resultare clara, ésta se decidirá en la sentencia que resuelva la cuestión planteada.”

⁸“**Artículo 230.** La sentencia que se dicte deberá contener:

I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso...”



“**ARTICULO 224.** El juicio ante el Tribunal es improcedente:

VI. Contra los actos o las disposiciones generales que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por aquellos contra los que no se promueva el juicio en los plazos señalados por esta ley;

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.”

“**ARTÍCULO 120.** La demanda deberá formularse por escrito y presentarse, directamente o por correo certificado; con acuse de recibo, ante el Tribunal, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto que se impugna o aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo, con las excepciones siguientes:”

En ese sentido, las autoridades sostienen que, a la fecha de presentación de la demanda, el acto ya había sido consentido por la actora, pues la fecha de este excede los quince días que establece el artículo 120 de la Ley de Justicia.

Pues bien, no le asiste la razón a las enjuiciadas, pues, si bien es cierto que la fecha consagrada en la boleta de infracción es del *****, también resulta verídico que ésta no fue impuesta directamente a la actora, sino que fue “a quien resulte responsable”, por lo que no existe constancia que en esa misma data se haya hecho saber a la enjuiciante de la existencia del acto de autoridad.

En ese sentido, el citado numeral 120 de la Ley de Justicia establece:

“**ARTÍCULO 120.-** *La demanda deberá formularse por escrito y presentarse, directamente o por correo certificado; con acuse de recibo, ante la Sala, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto que se impugna o aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo, con las excepciones siguientes:*

[..]”

(Lo subrayado es nuestro)

Por tanto, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo se computa a partir de que existe constancia que se ha notificado el acto de autoridad al gobernado o, en su defecto, cuando éste haya tenido conocimiento de dicho acto; en este caso, la actora adujo bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia de la boleta de



infracción, el día dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, circunstancia que no fue desvirtuada por las demandadas.

En consecuencia, se debe estimar que el plazo a que alude el citado numeral 120 de la Ley de Justicia, le empezó a correr a la aquí actora, a partir del día dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por lo que el acto fue impugnado dentro del plazo legal.

De ahí lo infundado de la causa de improcedencia.

Por otro lado, las autoridades demandadas también sostienen que el juicio es improcedente por la causal prevista en el artículo 224 fracciones IX, con relación al diverso artículo 109, fracción II, ambos dispositivos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, por lo que procede el sobreseimiento con base en lo dispuesto en el artículo 225 fracción II del mismo ordenamiento.

El argumento toral lo sostienen usando como base que, al Director General de Seguridad Pública y Vialidad, no le asiste el carácter de autoridad demandada, habida cuenta que él no dictó, ordenó o ejecutó el acto de autoridad que aquí se impugna.

Pues bien, debe decirse que no le asiste la razón a la autoridad enjuiciada. En efecto, una causa de improcedencia estriba en el hecho de que la autoridad a quien se direcciona la acción de invalidez en juicio contencioso administrativo no haya participado en el dictado, orden o ejecución de aquél, pues genera una falta de legitimación pasiva.

Sin embargo, en la especie sí le es atribuible el acto hoy impugnado a la autoridad que se demanda, ya que, de una simple lectura de la boleta que materializa el acto de autoridad, se advierte que la misma se encuentra rotulada por la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Tepic, Nayarit, y además, en la parte inferior izquierda de la mencionada boleta⁹ se lee claramente que la misma fue expedida por el Titular de dicha Dirección, por lo que, sin asomo de duda, se colige que

⁹ Visible a folio 8 de autos.



en la actuación que hoy se impugna sí participó la autoridad demandada.

En consecuencia, se desestima la causa de improcedencia hecha valer por el enjuiciado.

Asimismo, el enjuiciado hizo valer una diversa causa de improcedencia, en este caso, la falta de definitividad del acto, invocando como fundamento de dicha causal, las fracciones IV y VII, de la citada Ley de Justicia.

Lo anterior, porque, aducen las autoridades demandadas que, con su actuación, no se le requirió del pago de la sanción pecuniaria en ese momento al accionante, sino que, solo se le indicó las contravenciones cometidas y las sanciones aplicables, por lo que, a su juicio, dicho actuar no puede considerarse un acto definitivo.

Pues bien, no le asiste la razón a la autoridad enjuiciada, toda vez que, la Ley de Justicia faculta al ciudadano para que, ante un acto de autoridad que considere se ha realizado de manera ilegal, puede acudir al juicio contencioso administrativo ya que el solo levantamiento de una boleta de infracción sí se considera un acto de molestia para el ciudadano y éste posee el derecho subjetivo público de impugnarlo a través del procedimiento que nos ocupa.

Resueltas las causales anteriores y de la revisión que de oficio realiza esta Segunda Sala Unitaria Administrativa no aprecia que se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento los que se enuncian en los artículos 224 y 225 de la Ley de Justicia, que imposibiliten el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, consecuentemente, no se sobresee el presente Juicio Contencioso Administrativo.

Tercero. Puntos Controvertidos. De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el presente juicio se centra en determinar si procede resolver la invalidez del acto impugnado consistente en **la boleta de infracción con número de folio ***** de fecha ******* o, como afirman las autoridades al contestar la



demanda, el acto de autoridad es válido por encontrarse debidamente fundado y motivado.

Cuarto. Estudio de Fondo. En virtud de que esta Segunda Sala Unitaria Administrativa determinó que no se actualizaron causales de improcedencia que impidieran el estudio de fondo del presente asunto y una vez precisado en el considerando anterior en qué consiste la litis en el juicio que se actúa, se procede al estudio y resolución de los conceptos de impugnación expresados por la parte actora en su escrito de demanda.

Al efecto, y según el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no es necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer el accionante en su escrito inicial, ni la contestación que produjera al respecto la demandada, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a las partes, por lo que en la presente sentencia definitiva no se transcriben por cuestiones de economía procesal y sentido ecológico, y se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase.

Cabe hacer la precisión que lo anterior, no implica falta de cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, es decir, sin que sea obstáculo para que en la presente resolución se estudien de manera exhaustiva, todas y cada una de las inconformidades planteadas, como lo prevé el artículo 230, fracción III¹⁰ de la Ley de Justicia, se sustenta lo anterior por analogía en la tesis jurisprudencial: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**¹¹

Pues bien, previo al análisis de los conceptos de impugnación que hace valer la parte actora, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa estima necesario precisar que el texto del artículo 1º de la Constitución Política

¹⁰“Artículo 230. La sentencia que se dicte deberá contener:

III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnados; ...”

¹¹Tesis: 2a./J. 58/2010, de Jurisprudencia, de la Novena Época, de la Instancia de la Segunda Sala, en materia Común, con registro 164618, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; de la fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.



de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa, estatuye que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Lo expuesto revela el imperativo de este Órgano Jurisdiccional de atender, en el ámbito de su competencia, en todas y cada una de sus determinaciones, resoluciones y sentencias, los invocados principios, sólo así, se garantizará el derecho humano de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 Constitucional.

Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio correspondiente a la Décima Época, con registro número 2012228, instancia Pleno, tipo de tesis Jurisprudencia, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta y tres, agosto de dos mil dieciséis, tomo I, en materias constitucional y común, tesis P./J. 5/2016 (10a.), página once, con el rubro ***“DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL”***.

Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abandonado el criterio formalista en que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de **violación** para ser tal debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos de autoridad reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados.

De ahí que, arribó al criterio que la expresión de los **conceptos de violación** no se haga con formalidades tan rígidas y solemnes y que la demanda no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse



en su conjunto, es razonable que deban tenerse como **conceptos de violación** todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la **causa de pedir**, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le **causa** el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.

Las consideraciones expuestas constituyen en la sustancia la jurisprudencia con registro 195518 de la Novena Época, cuya instancia es la Segunda Sala con el rubro **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.**

Precisado lo anterior, y analizada la demanda en forma integral como un todo, a los conceptos de impugnación, los argumentos hechos valer, las constancias que integran los autos, la Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Justicia Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, determina que los argumentos hechos valer por la parte actora resultan esencialmente **FUNDADOS** por lo que es procedente resolver la invalidez del acto consistente en la boleta de infracción *****, de fecha ***** y la multa que esta trae aparejada, por las siguientes consideraciones:

La parte actora aduce que el acto de autoridad al que fue sujeta vulnera en su perjuicio, lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la boleta de infracción levantada, se considera un acto carente de una adecuada motivación, lo que lo convierte en un acto arbitrario, lo que violenta los derechos de legalidad y seguridad jurídica.

Pues bien, le asiste la razón a la actora, toda vez que, si bien es cierto que en la boleta de infracción la autoridad demandada sí invoca parcialmente el fundamento normativo de la infracción, también lo es que ésta adolece de motivación; puesto que, al asentar la descripción de la

conducta que motiva la infracción, únicamente refirió:

“Artículo 29, fracción IV. Vehículo abandonado en la vía pública.”

De lo que se advierte que la autoridad se limitó a simples apreciaciones personales, siendo que le corresponde la obligación de narrar de manera específica los hechos en que sustente que la conducta desplegada por el conductor del vehículo real e indudablemente violentó la normativa de vialidad.

De ahí que, no basta señalar hechos genéricos y apreciaciones personales, sino que la obligación que posee la autoridad demandada consiste en relatar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como sucedieron todos y cada uno de los hechos en que apoye el proceder de su encargo. Consecuentemente, de no cumplirse con ello, es obvio que las simples aseveraciones limitadas a una apreciación personal, corresponde a una falta de fundamentación y motivación que trae como consecuencia una violación a la esfera jurídica del actor.

Efectivamente, el agente de Policía Vial que impuso la infracción asentó en la correspondiente boleta que el vehículo se encontraba en estado de abandono en vía pública, sin embargo, el citado agente no motivó ni estableció de manera detallada cómo arribó a esa conclusión, si fue derivado de un reporte ciudadano, cómo se percató de que el vehículo efectivamente estaba abandonado, si se conocía o desconocía el propietario de este, el tiempo en que el vehículo tenía estacionado en ese lugar, entre otras cosas que pudieran llevar a concluir que la infracción impuesta tuvo motivos claros e indubitables.

Luego, el artículo 64 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tepic, prevé entre otras, como una obligación de los Servidores Públicos de Policía Vial en el ejercicio de sus funciones, señalar al conductor la infracción que ha cometido y en su caso, levantará la boleta correspondiente y entregándole al infractor el original de esta, la cual debe cumplir con una serie de requisitos.



Exigencias que en el caso concreto pasan inadvertidas por la autoridad demandada, puesto que carece de una debida motivación, así como de la descripción de hechos que motivaran la conducta infractora.

Consecuentemente, es inequívoco que el acto impugnado se encuentra investido de ilegalidad al no cumplir con los requisitos que marca la ley de la materia.

Por tanto, el arrastre y retención del vehículo y la eventual multa que pudiera derivar de ello, son consecuencia de un acto ilegal; y en ese sentido, esa ilegalidad se extiende a dichos actos, con lo cual, lo procedente es que se invaliden, tanto la boleta de infracción como la posible multa que emana de aquella, por encontrarse ambas tildadas de ilegalidad.

En consecuencia, ante la ausencia de legalidad del acto emitido por la autoridad demandada, no existe la certeza jurídica de que la conducta desplegada por el accionante haya sido contraria a lo establecido por la normativa aplicable, son aplicables por analogía al caso concreto las siguientes tesis:

La Tesis aislada de la Octava Época, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, visible en el Tomo XIV, Julio de 1994, página 626, del Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra dispone:

“INFRACCIONES DE TRANSITO SIN FUNDAMENTACION NI MOTIVACION.

Aun cuando en un recibo de infracción de tránsito, en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y sea a todas luces conocido que esto significa que la violación cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere, o bien que se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, el hecho de no mencionar a que ordenamiento legal corresponde el precepto señalado, así como las causas por las cuales se impuso la infracción, no puede considerarse jurídicamente como una resolución fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la Carta Magna.”



Así como la Tesis Aislada I.3o.C.52 K dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Tomo XVII, abril de 2003, página 1050, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra dispone:

“ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.

De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.”



Ahora, no pasan desapercibidas las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que, el accionante no acepta que se le aplicó una boleta de infracción por transgredir el artículo 29, fracción IV, del Reglamento de Tránsito y Movilidad de esta ciudad, sin embargo, aunado a que no existe constancia de ello, el presente juicio se ocupa de determinar si la actuación de la autoridad demandada fue realizada con apego o no, a la legalidad.

Por ello, con base en las consideraciones legales expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución y con fundamento en el artículo 231, fracción II, de la Ley de Justicia, es procedente declarar la **invalidez** de la **boleta de infracción** ***** de fecha ***** y, por ende, de la eventual **multa** que pueda derivar de aquella.

Finalmente, en virtud de que en los autos del presente juicio no existe constancia que acredite que las autoridades demandadas hayan realizado la devolución o entrega del vehículo a la parte actora, se ordena su entrega o, en su caso, se les requiere para que demuestren haber dado cumplimiento a la suspensión del acto impugnado ordenada mediante auto de fecha seis de septiembre de dos mil veintitrés.

Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa;

RESUELVE

Primero. Resultaron infundadas las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades demandadas, por lo que no se sobresee el presente juicio.

Segundo. La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción, de conformidad con las consideraciones vertidas en la presente sentencia.

Tercero. Se declara la **invalidez lisa y llana** del acto impugnado, consistente en la boleta de infracción número ***** de fecha *****, así como de la multa que deriva de ella.



Cuarto. En su oportunidad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, remítase el expediente al archivo como un asunto total y legalmente concluido.

Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas.

Así lo resolvió y firma el suscrito Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, Licenciado **Juan Manuel Ochoa Sánchez**, ante la fe del Secretario Proyectista, Licenciado **Juan Carlos Rodríguez Sotelo**.

“El suscrito Secretario Proyectista Juan Carlos Rodríguez Sotelo, adscrito a la Segunda Sala Unitaria Administrativa, con fundamento en los artículos 2, fracciones VII, XV, XVI, XX, y XXXVII, 64, 65, 66, 79 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 4, fracciones VIII y IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit; Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y en los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones Públicas de las Sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit; elaboró la versión pública de la sentencia antes identificada, de la que se testan los datos considerados legalmente como información clasificada por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos; información consistente en: Información Clasificada, Información Confidencial e Información Reservada.”